

FRANCOFOBIA LIBERAL¹

Los disturbios de otoño de 2005 brindaron una extraordinaria prueba de la unidad existente en el seno del *establishment* político francés. Los portavoces parlamentarios conjuraban imágenes de «bandas de *hooligans*», de «mafias» y de «fundamentalistas» –reedición del tropo decimonónico de las *classes dangereuses* en una nueva versión etnizada– mientras el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, anunciaba la declaración del estado de emergencia, desempolvando leyes coloniales de 1955. Como era de esperar, el Partido Socialista, que en febrero de 2005 había apoyado la aprobación de una ley en la que se especificaba que el plan de estudios de la asignatura de historia para la etapa escolar debía «reconocer el papel positivo que había tenido la presencia francesa en otros territorios... especialmente en África del Norte», brindó una respuesta invertebrada. Por su parte, el Partido Comunista francés permaneció atenazado por las tendencias opuestas existentes entre las filas de su partido y sus representantes electos, alguno de los cuales había hecho un llamamiento a favor de sacar el ejército a las calles. Una minoría radical manifestó su solidaridad con los *révoltés*, pero pocos fueron tan lejos como para buscar las raíces del malestar en el propio modelo social francés.

Frente a este telón de fondo de autismo político generalizado, el libro escrito por Timothy Smith y titulado *France in Crisis* –recientemente traducido al francés bajo el título más sugestivo de *La France injuste*– emerge como una intervención directa y provocadora. Smith, que escribe desde su residencia en la Queen's University, en Ontario, es autor de un estudio sobre los orígenes del Estado del bienestar francés realizado en 2003. En esta ocasión, se aparta de la erudición de aquel volumen y adopta una postura más polémica formulando audaces proclamas en un lenguaje llano y enérgico encaminado a atraer la atención del lector corriente y, a la vez, a desconcertar al especialista. En el presente contexto, su afirmación de que los males actuales de Francia son «*made in France*, fruto de buenas intenciones, de malas políticas y de intereses creados», es claramente

¹ Timothy SMITH, *France in Crisis. Welfare, Inequality and Globalization since 1980*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.

una provocación al debate. En este libro, Smith emprende un duro ataque contra el desempleo, que considera «una lacra social que sólo sirve para nutrir el extremismo político», y argumenta que el mejor remedio frente a las tensiones que genera residiría en un mercado de trabajo más dinámico: «Lo que necesitan los inmigrantes franceses es una sociedad vigorosa, con pleno empleo (y, por supuesto, menos racista)». En esta línea, su trabajo abunda en el análisis del destino de aquellas personas excluidas del acceso al empleo y del sistema de previsión social, haciendo un especial hincapié en el vergonzoso tratamiento que reciben las personas discapacitadas y las comunidades de descendientes de inmigrantes. Asimismo, emite una punzante crítica hacia la naturaleza elitista de las *grandes écoles* que le lleva incluso a proponer la supresión de la *École Nationale d'Administration*. Estas aportaciones resultan sumamente importantes para cualquier crítica del sistema del bienestar francés que pueda elaborarse desde la izquierda, y su trabajo debería ser ampliamente leído y discutido. Sin embargo, buena parte de sus prescripciones sobre las medidas que deberían adoptarse se revelan sumamente problemáticas.

En las primeras páginas del libro, el propio Smith se posiciona como un admirador de «las políticas sociales características del modelo escandinavo», por un lado, y del «dinamismo de los mercados de trabajo propios del modelo holandés y estadounidense», por otro. Su doble énfasis en un gasto social redistributivo y en una política económica y laboral de corte liberal aporta los dos pilares básicos de *France in Crisis*. En cuanto al primer aspecto, su autor sostiene que el Estado del bienestar francés, que descansa sobre un sistema fiscal regresivo, favorece injustamente a «los que están dentro» –aquellos que ya poseen un empleo, especialmente en el sector público, a los jubilados y a los grupos dedicados al acaparamiento de renta– a costa de «los que están fuera»: jóvenes, inmigrantes, mujeres y discapacitados. El problema del *État providence* reside, entonces, en no ser lo suficientemente redistributivo, en la medida en que el gasto está escorado hacia el lado de las personas que ya disfrutaban de una situación acomodada y se aleja de los que más lo necesitan.

El segundo pilar descansa en la afirmación de que el excesivo gasto público, el acusado perfil restrictivo de la normativa reguladora del mercado de trabajo, los sindicatos y las formas de negociación colectiva obstruccionistas, así como la incidencia de incrementos salariales desproporcionadamente altos –en particular del salario mínimo–, suponen, en su conjunto, un elevado peso que entorpece el dinamismo del mercado y que amarra a la economía francesa en un corsé restrictivo. Las oportunidades para la creación de empleo se ven abortadas por la acción tanto de los políticos como de los líderes de los sindicatos, especialmente en lo que respecta a los trabajos peor remunerados y cualificados; un sector que si se permitiera su desarrollo ayudaría a muchos jóvenes a salir del gueto del desempleo en el que se encuentran. Smith describe la economía francesa como un mecanismo perverso que genera una segmentación de la sociedad entre una mayoría de dos tercios cuyo empleo se encuentra pro-

tegido, y una gran minoría cuyas oportunidades de empleo se encuentran completamente bloqueadas.

Como contrapunto a esta situación, en Estados Unidos el mercado de trabajo «crea millones de colocaciones en la economía para una fuerza de trabajo no cualificada». Aunque Smith no se hace ilusiones sobre las desigualdades de renta que genera el modelo estadounidense, defiende que «la efervescente economía estadounidense distribuye los empleos de un modo mucho más equitativo que el francés». Además, prosigue, la ausencia comparativa de privilegios corporativos en Estados Unidos y su laxa legislación laboral suponen que «el riesgo y la inseguridad se hallan distribuidos de una manera más equitativa entre toda la fuerza de trabajo», mientras que en Francia las condiciones laborales más adversas se concentran en el colectivo de los jóvenes y los inmigrantes.

En su opinión, el principal obstáculo para una puesta a punto a fondo del sistema francés reside en la adscripción de gran parte de la población del país a un modelo particular del Estado del bienestar. En este sentido, ofrece un análisis histórico del desarrollo seguido por este modelo durante el periodo posbélico, caracterizado por el acrecentamiento progresivo de regímenes de base profesional: por ejemplo, en 1947 se creó un fondo de seguros para los *cadres* [cuadros] al que sucedió, en 1948, la creación de otros seguros para artesanos, profesionales liberales y comerciantes, y la creación, en 1951, de un seguro para trabajadores del campo. Este proceso dio lugar a un sistema fragmentado erigido alrededor de la figura del obrero, de sexo masculino, a tiempo completo y abierto a la colonización por parte de asociaciones profesionales, grupos de interés y, de manera crucial, del movimiento sindical. A pesar de que durante la Segunda Guerra Mundial algunos miembros del gobierno de la Resistencia, con base en Londres, admiraban los principios universalistas del Beveridge Report, después de 1945 el sistema francés no se remodeló en consonancia con las líneas británicas. De acuerdo con el análisis de Smith, esto se debió a que «los profesionales, los trabajadores autónomos, los trabajadores cualificados concentrados en torno al sector público y la clase media en general torpedearon las tentativas legislativas de llevar a cabo una reforma en ese sentido», aunque Smith apenas hace referencia a la intensa lucha de clases sostenida durante el periodo inmediatamente posterior a la guerra.

En la década de 1970, este sistema corporativista, que había funcionado de manera óptima durante las décadas de 1950 y 1960 y que de manera destacada había eliminado la pobreza entre la población de la tercera edad, entró en una crisis a largo plazo debido a que los intereses particularistas obstaculizaban cualquier redistribución del gasto destinada a favorecer a los grupos más débiles y desfavorecidos de la sociedad. La cruda caracterización de Smith del sistema del bienestar francés es la siguiente:

[es] un sistema del bienestar diseñado para la clase media y media-alta de la sociedad, no un sistema para la clase obrera. Es un Estado de pensionistas, no

un Estado que promocióne a la juventud. Es un sistema de protección para las personas poseedoras de un empleo, no un Estado que se asiente sobre el pleno empleo. Su principal preocupación reside en la protección del empleo y no en permitir o ayudar primeramente al mercado a crear (y destruir) puestos de trabajo.

A la hora de identificar a los responsables de la consolidación de estos desequilibrios, Smith propone tres candidatos principales: los pensionistas; una categoría escurridiza formada por «los ricos», que en ocasiones aparece en tándem con una también indefinida «clase media»; y los sindicatos. La prosa de Smith se torna especialmente ponzoñosa cuando se refiere a estos últimos, que, en su opinión, «han logrado encubrir sus estrechos horizontes bajo la retórica de la solidaridad». Además, incluso la retórica presenta sus límites:

En la visión mítica de la solidaridad obrera nunca se ha abierto un espacio en el que quepa una joven mujer desempleada, un padre o una madre que cría a sus hijos sin pareja y que trabaja a cambio del salario mínimo, un argelino que vive en un gueto de viviendas de protección oficial en el extrarradio de Lyon, o una persona discapacitada rechazada por el mercado de trabajo y que vive sola en París gracias a una miseria proporcionada por el Estado.

En opinión de Smith, éstas son las personas a las que los sindicatos franceses han abandonado. En lugar de ejercer presión en favor de la creación de nuevos empleos destinados a la población desempleada, el movimiento obrero francés ha «concentrado sus esfuerzos en defender los empleos existentes» y el régimen de privilegios especiales adscrito a los mismos. Como ejemplo, Smith cita las ventajas de los trabajadores de la EDF, de los trabajadores de los ferrocarriles franceses o de la plantilla del Banco de Francia, entre muchos otros ejemplos de privilegios de los que disfrutaban grupos minoritarios y que erosionan la capacidad redistributiva del Estado, así como su margen de maniobra en materia económica. Tal como sostiene el archipámpano de *Le Monde*, Alain Minc, se trata de un régimen «neoseñorial» en el que los grupos corporativistas extraen los tributos de la población activa. Smith parece coincidir con él en esa afirmación, ya que en una invectiva lanzada contra las movilizaciones alrededor de las reformas neoliberales promovidas por Juppé y Raffarin declara que «el *Ancien Régime* está vivo y protestando en las calles».

A su vez, el sistema de pensiones es sometido a un escrutinio menos ideológico pero igualmente condenatorio. Smith sostiene que la amplia y creciente partida presupuestaria asignada a las pensiones opera como un mecanismo fundamental en la socavación de los intentos de llevar a cabo una redistribución económica. A pesar de que en términos generales los datos demográficos permanecen estáticos, «durante la década de 1990, en Francia, el porcentaje del gasto público destinado a sufragar las pensiones dentro del PIB presentó un ritmo de crecimiento más acelerado que

el del resto de países de la OCDE, únicamente aventajado por el de Holanda». En su opinión, este incremento obedece a motivaciones políticas. El resultado no sólo ha consistido en «agrandar los desequilibrios generacionales que han dividido Francia durante treinta años», sino también en agudizar la brecha existente entre los trabajadores del sector público y el resto de la clase trabajadora.

La franja del 30 por 100 de la población afiliada al sistema de protección de los trabajadores del sector público y a otros regímenes especiales consume el 60 por 100 del coste anual de las pensiones, el doble de lo que le correspondería en un mundo en el que el gasto en pensiones fuese verdaderamente equitativo. El restante 70 por 100 de la población jubilada, afiliada al principal fondo de pensiones para los trabajadores del sector privado, acapara sólo el 40 por 100 del coste de las pensiones, pero ha estado subvencionando la insolvencia del régimen especial de los fondos de pensiones a lo largo de décadas.

Smith concluye que los recortes son una medida esencial, y además despliega una elaborada defensa de los sistemas privados de pensiones como complemento del sistema público basado en un régimen de reparto, e incluso valora positivamente el modelo estadounidense: «Los estadounidenses que mantienen una vida laboral regular no se ven (ni se verán) condenados a la miseria si pierden la pensión gestionada por su empresa, puesto que todos los trabajadores reciben la pensión mínima de la Seguridad Social y en escasas ocasiones tales planes de pensiones se declaran en quiebra».

Sin embargo, por regla general, Estados Unidos aparece citado como ejemplo de una excesiva liberalización. Smith cita con más frecuencia la experiencia holandesa de la reducción de los salarios, de las reformas del Estado del bienestar y del mercado de trabajo y su éxito en la reducción del desempleo a gran escala como un modelo más positivo, e intercala esta referencia con alusiones más ocasionales a Canadá y a Suecia. Holanda brinda una prueba de la posibilidad de reorientar el Estado del bienestar francés para que adopte un carácter más redistributivo sin impedir el incremento de la flexibilidad laboral. En efecto, Smith opina que el éxito alcanzado por el modelo holandés supone «un motivo de bochorno para muchos políticos e intelectuales franceses» que buscaban velar sus logros o bien deslegitimarlos para poder así «limpiar sus conciencias y sentirse reconfortados con el pensamiento de que no había alternativa al camino que escogieron durante las décadas de 1980 y de 1990». Un capítulo entero del libro está dedicado a exponer lo que considera una forma de evadir su responsabilidad por parte de la elite política e intelectual francesa, la cual culpó a la «globalización» de problemas que tenían un origen doméstico y criticó los sistemas anglosajones, antes de que decidiera implementar, de manera irregular y furtiva, gran parte del programa desarrollado al otro lado del Canal en la década de 1980.

France in Crisis consigue penetrar de manera relevante en diversos temas y, en este sentido, cabe citar una valoración a grandes rasgos positiva del sistema de salud francés. Asimismo, provee un útil examen de la configuración escandalosamente regresiva de su sistema impositivo, que se apoya en gran medida en los impuestos sobre las ventas y cuyo impuesto sobre la renta apenas representó un 14 por 100 del total de la recaudación tributaria en 1997, frente al 25, 24 y 39 por 100 que alcanzó respectivamente en Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos. Exenciones, privilegios y lagunas legales a favor de las capas más acomodadas constituyen un «velado Estado del bienestar para los ricos» y explican, en parte, el contento general con el *statu quo* existente entre las capas de la sociedad con rentas más elevadas.

En las conclusiones del libro, Smith ofrece una relación de las medidas recomendadas, que recoge desde propuestas provocadoras y nada ortodoxas –la abolición de la ENA, por ejemplo– a otras prescripciones de corte más liberal como la contención de los salarios, el ablandamiento de la normativa laboral, la congelación del salario mínimo y el recorte de las pensiones. Las indicaciones de Smith también incluyen algunos cambios positivos en la esfera social y apela, entre otras cosas, al aumento –no dice en qué cantidad– de los impuestos progresivos, de las asignaciones familiares y de ayuda a la vivienda, y de los fondos destinados a las universidades, a la investigación y a las personas discapacitadas. No obstante, no es posible discernir una jerarquía o escala de prioridades en su lista, que, en sintonía con todo el resto del libro, oscila entre los polos liberal y social de su argumentación. El énfasis de su análisis descansa en indicar que ambos extremos pueden conciliarse para ubicar un «punto medio feliz» entre el exceso estadounidense y la *europarálisis*. Redistribución y mercados de trabajo dinámicos, expansión estatal y repliegue del Estado, cambio económico (esto es, desarrollo capitalista) y equidad, pueden ser tendencias compatibles entre sí, siempre y cuando se tomen las opciones políticas correctas y tanto los líderes como la población se muestren lo suficientemente adaptables.

La importancia del trabajo de Smith reside en que se aleja tanto de la complacencia galocéntrica como de las diatribas al uso contra la flacidez del modelo europeo. Sin embargo, se puede oponer a su exposición una serie de objeciones de naturaleza cultural-intelectual, teórica, empírica y política. La antipatía de Smith hacia el movimiento obrero francés ha sido señalada anteriormente. Todo el libro está empapado por la amenaza de conflagración social, y tal vez sea el miedo a una reedición de 1968 lo que explique el tono estridente de su discurso. Pero también da muestras de cierta debilidad analítica. Su insistencia en la «aristocracia de la solidaridad» de las organizaciones obreras tiende a hacer desaparecer y a difuminar a otros actores sociales. Indudablemente, su estudio carece de un concepto sólido de clase en el que apoyarse para sostener sus argumentos. Los «ricos» son mencionados con relativa frecuencia, pero no existe una clase capitalista objeto de análisis; si bien existen unos «empleadores»,

discriminados, a los que se impide contribuir a la igualdad mediante la línea roja trazada por el Estado y la obstinación de los políticos y los sindicatos. Smith también da muestras de una destacada ausencia de profundidad histórica o sociológica cuando sugiere que los inmigrantes actuales podrían, al igual que los polacos, los españoles y los portugueses de periodos anteriores, integrarse perfectamente en el sistema gracias a unos mercados de trabajo dinámicos; pasando por alto la conexión entre el *status* de los norteafricanos como antiguos sujetos coloniales y su actual experiencia del racismo.

Aunque Smith indica que su objetivo es elaborar un estudio comparativo trasnacional –dado que presenta el caso de Holanda, Suecia, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Alemania–, su utilización del material recogido es sumamente selectiva. En lugar de efectuar una comparación metódica, caso por caso, con el sistema francés, Smith tiende a seleccionar ciertos aspectos de manera más o menos discrecional, y a variar los ejemplos en función del argumento que despliega en cada momento. Asimismo, tampoco hay una escala relativa de diferenciación de los casos: Estados Unidos y Holanda, sin ir más lejos, son comparados con Francia como si los tres países fueran equivalentes. Las yuxtaposiciones de Smith omiten muchos detalles elocuentes y, en este sentido, a pesar de hacer referencia a algunas desigualdades de la sociedad estadounidense, no menciona el hecho de que el salario del 25 por 100 de su fuerza de trabajo no supera o está por debajo del umbral de pobreza; un tercio trabaja por encima de la jornada máxima laboral; 42 millones de personas no tiene seguro médico, de acuerdo con cifras de 2003; y 1,4 millones se encuentra en prisión y, por lo tanto, no aparece en las cifras del desempleo.

Podría decirse que Smith pisa un terreno más firme en aquellas secciones del libro dedicadas a abordar el «milagro holandés», que es el título de un libro publicado en 1997 por Jelle Visser y Anton Hemerijck, en el que se brinda un análisis próximo al que él mismo ofrece. (Aunque parece no haber acudido a otros trabajos menos optimistas, como el libro de Lei Delsen *Exit Polder Model?* [2002].) Smith califica correctamente al Estado del bienestar holandés de híbrido que presenta acusados elementos universalistas en su sistema de previsión social y de protección de la salud, y relativamente pocos regímenes corporativos o especiales. Todos los ciudadanos tienen derecho a la pensión mínima, así como el deber de sufragar el sistema de protección, y los trabajadores a tiempo parcial no se ven perjudicados en términos de derechos sociales. Sin embargo, el hecho de que hubiera un amplio consenso sobre los recortes en el salario real y nominal acordados en el Wassenaar Agreement de 1982 resulta una cuestión discutible, puesto que, en realidad, algunos líderes obreros hicieron algo más que «refunfuñar». En efecto, a lo largo de la década de 1980 y durante los primeros años de la de 1990, Holanda experimentó las mayores oleadas de protestas masivas de toda su historia desde la posguerra. Por otro lado, los bajos niveles de las cifras oficiales de desempleo se tornan menos admirables cuando se toma en consideración la tasa de sub-

empleo, que según estimaciones de la Agencia Central de Estadística Holandesa se sitúa en el 20 por 100 del total de la fuerza de trabajo. Las cifras de creación de empleo enmascaran un desplazamiento sustancial hacia el trabajo parcial en detrimento del empleo a jornada completa, así como un aumento del trabajo irregular y precario que ha mantenido el volumen total de trabajo remunerado prácticamente al mismo nivel. El grado de pobreza se ha incrementado, al igual que lo han hecho las diferencias salariales. Si atendemos a estas consideraciones, que en cierta medida vienen a matizar el retrato positivo dibujado por Smith, es posible que el «No» holandés de mayo de 2005 en el referéndum constitucional europeo, así como las fracturas sociales que el mismo reveló, nos parezcan menos sorprendentes.

No resulta difícil imaginar el modo en que Smith recibió el resultado del voto francés en el referéndum, o las huelgas de los jóvenes contra la legislación que regula el «Contrato de Primer Empleo», en la medida en que no son sino ejemplos adicionales de la obstrucción que ejercen «los que están dentro del sistema» y que apuntan de manera todavía más insistente a la necesidad de una reforma radical que permita dejar atrás el lastre del discurso contra la globalización. La visión de Smith de la escena política e intelectual puede dar la impresión a los lectores francófonos de que han entrado en un universo paralelo, ya que el país que describe, a pesar de tener algunos rasgos familiares, guarda poco parecido con la Francia en la que habitan. De manera indiscriminada, tacha a la Ligue Communiste Révolutionnaire, a Chevènement y a la extrema derecha de fuerzas «extremistas» cuya emergencia se vio promocionada por una retórica irresponsable sobre la globalización desencadenada por la elite política. Además, el consenso en torno a la antiglobalización es descrito como un elemento que recorre todo el espectro político, desde Chirac a José Bové. *Le Monde*, *Libération*, *Le Monde diplomatique*, *l'Humanité*, *Politics* y *Alternatives économiques* se describen como «la cabeza de la prensa francesa» e igualmente se tachan de aparatos al servicio del antineoliberalismo. Resulta cuando menos retorcido sugerir que el periódico diario del Partido Comunista francés y dos publicaciones sin duda marginales –*Politics* es un semanario de tinte ecologista y *altermondialiste*, y *Alternatives économiques* es una publicación mensual, seria, de corte socialdemócrata– son de algún modo representativos de la corriente dominante del debate político. Pero, asimismo, presentar a *Le Monde* y a *Libération* como heraldos del movimiento antiglobalización es algo sencillamente ridículo. Igualmente estrambótica resulta su afirmación –causante de una gran perplejidad en la sede central del Partido Socialista, en la *rue Solférino*– de que bajo François Hollande el partido «ocupa ahora el lugar de la única opción “*altermondialiste*” viable; la agenda de la antiglobalización se encuentra en la base de su programa».

Smith amalgama todas las críticas de la globalización neoliberal –las emitidas tanto por rigurosos analistas como por políticos oportunistas, de los que sin duda hay muchos– y, de este modo, pretende invalidar

sus análisis como una mera cortina de humo lanzada por aquellos que insisten en un modelo francés singular e inmutable. Pero es al revés, ya que algunos grupos como ATTAC, *Le Monde diplomatique* y la Fondation Copernic hacen precisamente hincapié en que la integración global de los recursos financieros y de la producción no impone una forma particular de organización socioeconómica, y en que algunas reformas, como la tasa Tobin o prohibir el despido en las empresas rentables, son medidas realmente viables. La diferencia fundamental estriba en que, si bien Smith incide en la necesidad de introducir variaciones en el Estado del bienestar, únicamente puede vislumbrar esas variaciones dentro del sistema capitalista.

La concepción del capitalismo como un horizonte *indépassable* de nuestra era ganó una especial aceptación durante la década de 1980 con la implantación del *pensée unique*. Smith no menciona en absoluto el influjo intelectual de esto último, a pesar de que la reciente entrada de las críticas a la globalización en la esfera pública es claramente, al menos en parte, una reacción contra tal dominio del liberalismo. Por el contrario, en *France in Crisis* es como si sencillamente la contrarrevolución ideológica de las décadas de 1970 y de 1980 encabezada por los *nouveaux philosophes* no hubiera ocurrido. La confianza en la valoración de Smith de la escena intelectual se ve todavía más debilitada a causa de sus insustanciales digresiones acerca de una tradición de «posicionamiento ideológico», y de sus especulaciones de salón sobre una predisposición francesa a la búsqueda de metanarrativas. Los «intelectuales» son presentados como una masa indiferenciada, que pocas veces se cita de manera nominal o directa excepto para atacar a Viviane Forrester por ser una «analfabeta en materia económica» y a Pierre Bourdieu, al que considera un defensor paranoico de los superprivilegiados trabajadores ferroviarios. Quizá el ejemplo más palmario lo encontramos en su afirmación de que en 1995, en reacción al «razonable paquete de reformas» de Alain Juppé, «los intelectuales franceses formularon un “*J'accuse*” colectivo contra Juppé». En realidad, se produjo una marcada polarización entre dos llamamientos distintos, uno en apoyo de las reformas y firmado por el *gratin* de la escena intelectual parisién –Pierre Rosanvallon, Jaques Julliard, Alain Touraine y Alan Minc, entre otros– y otro vivamente crítico con el anterior, firmado por Bourdieu y por otros académicos de la izquierda. La fusión de ambas posturas por parte de Smith, y la descripción de una exacerbada reacción histórica por parte de una susceptible *intelligentsia*, es uno de los muchos ejemplos de un fervor retórico que a menudo resulta desproporcionado frente al peso de sus argumentos.

Tal como hemos expuesto, en el aspecto económico su argumentación se apoya sobre la idea de que la combinación del gasto público excesivo, de la normativa reguladora del mercado de trabajo, de los incrementos salariales y de la negociación colectiva impide a la economía francesa tanto la creación de empleo como su propio crecimiento. Las principales recomendaciones de Smith consisten en la contención salarial, la laxitud de la

legislación laboral y la cancelación de la jornada laboral de 35 horas, considerando que se trata de sacrificios necesarios por parte de «los que están dentro» para evitar que «los que están fuera» permanezcan permanentemente excluidos. A pesar de que Smith se identifica a sí mismo como un iconoclasta, las medidas que sugiere son desalentadoramente similares a la doctrina neoliberal expresada por la corriente dominante de los economistas y de la prensa financiera. Los recientes trabajos elaborados por Andrew Glyn, Dean Baker y otros autores apuntan un error fundamental de la ortodoxia de la OCDE; a saber, que no hay absolutamente ninguna evidencia contundente de la existencia de una relación de causalidad entre el desmantelamiento de la «rigidez del mercado de trabajo» y el incremento de la «dispersión salarial», por un lado, y el descenso del desempleo por otro. Tras analizar los datos de 20 países de la OCDE a lo largo de cuatro décadas, sus trabajos demuestran que las restricciones del mercado de trabajo guardan poca correlación con los patrones de desempleo. Y es «todavía menos evidente» que un debilitamiento aún mayor de la protección social y colectiva de los trabajadores tenga un efecto positivo notable sobre el panorama laboral. En otro análisis de amplio alcance, David Howell ha encontrado pocos datos empíricos que avalen las aserciones de la «teoría unificada» en la que se apoya la defensa de Smith de la contención salarial y de la desregulación del mercado de trabajo. Howell sugiere que una ceñida política macroeconómica puede ser la causa más próxima del elevado nivel de desempleo existente en la UE.

Por otro lado, la medicina recetada por Smith ya ha sido aplicada en Francia durante los últimos veinte años con dudosos resultados. A partir de 1983, Francia ha implementado todas las recomendaciones de la OCDE en favor de la flexibilización del mercado de trabajo y de la reducción de los costes salariales. Y, en consecuencia, la cuota salarial en el PIB francés ha seguido el patrón descendente general que se observa en Europa occidental desde la década de 1980. El desempleo y la tasa de crecimiento del PIB han seguido, de manera semejante, los pasos de la media europea. De hecho, a pesar de la aplicación de las recetas neoliberales, no ha descendido el desempleo, sino que, más bien, se ha producido una reestructuración de la fuerza de trabajo que se manifiesta en un declive de las contrataciones a jornada completa, un incremento del trabajo parcial y una feminización de la fuerza de trabajo, así como un ascenso sustancial de los contratos precarios y temporales. En 1997, la respuesta de la OCDE al fracaso de su Estrategia de Empleo consistió simplemente en aconsejar «seguir adelante» en la misma dirección: más flexibilidad salarial, un régimen de beneficios sociales más estricto, el aumento de las privatizaciones, etc. Sin embargo, Smith parece no haber tomado nota de la contradicción existente entre las prescripciones neoliberales y las actuales tendencias en el empleo que muestra Francia.

Smith sostiene que la normativa sobre la jornada de trabajo semanal de 35 horas actúa como una barrera para la creación de empleo en la medi-

da en que aumenta los costes salariales. No obstante, las cifras del gobierno sugieren una influencia positiva indirecta de la jornada laboral de 35 horas semanales, puesto que ha favorecido la creación de al menos 200.000 puestos de trabajo. Los estudiosos franceses secundan el argumento de los autores anglófonos citados anteriormente sosteniendo que la afirmación de que la reducción de los costes laborales estimula el empleo debe ser tratada con cautela. Un reciente estudio realizado por Islem Gafsi, Yannick L'Horty y Ferhat Mihoubi calcula que tales medidas permitieron crear o salvar (según la hipótesis que se defiende) entre 137.000 y 319.000 empleos poco cualificados, pero que se destruyeron entre 98.000 y 222.000 empleos cualificados. El efecto neto fue, pues, un incremento de entre 40.000 y 100.000 empleos de baja cualificación –y, por regla general, mal remunerados–, mientras que desaparecieron miles de los empleos mejor remunerados y cualificados.

Muchos elementos de la crítica de Smith al modelo galo se deben al hecho de separar el caso de Francia del de otros países avanzados capitalistas. Por ejemplo, afirma que «durante los últimos veinticinco años del siglo xx, Francia presentó la tasa de creación de empleo más exigua y el incremento del desempleo más dramático que se registró entre las naciones ricas europeas y de América del Norte». Pero esta afirmación es sencillamente errónea, ya que, según las estadísticas de la OCDE, el comportamiento del empleo en Francia sigue a grandes rasgos la misma tendencia al alza que la media europea. En lo que respecta al desempleo, aunque las cifras francesas han planeado durante mucho tiempo por encima de la media europea, no existe una divergencia sistemática entre ambas tasas que pueda justificar la afirmación de Smith, quien pone un gran énfasis en el nivel de desempleo a largo plazo en este país, que se mantuvo justo por debajo del 4 por 100 en 2000; pero esto es exactamente lo mismo que ocurrió con la media europea, y es un porcentaje menor que el registrado en Alemania, Italia o España. Su aseveración de que «entre 1980 y 1994 el salario real experimentó en Francia un ascenso del 40 por 100» –lo que supuestamente es una de las causas fundamentales del desempleo– se demuestra lisa y llanamente falso, puesto que las cifras de la OCDE indican un aumento de sólo el 7,6 por 100, frente al 12,5 por 100 del incremento producido en el conjunto de la Unión Europea.

Distorsiones parecidas socavan la crítica de Smith del gasto del Estado del bienestar y del sistema de pensiones. Como parte de su argumento de que el gasto estatal, a pesar de su abundancia, es relativamente ineficaz a la hora de abordar problemas relacionados con la pobreza, Smith exagera la importancia del gasto del gobierno francés, que, de acuerdo con los datos de la OCDE, durante la década de 1990 experimentó un ascenso menor que el de Gran Bretaña, Suecia o Estados Unidos. También afirma que durante la década de 1970 «el mundo “anglosajón” mantuvo una estructura en las rentas mucho más igualitaria y un sistema fiscal más redistributivo que tres de las naciones más pobladas y presumiblemente

más *progresivas en la esfera social*: Francia, Alemania e Italia». Pero, por supuesto, esto era así antes de la oleada neoliberal y de los subsiguientes vastos incrementos de la desigualdad en las rentas que se produjeron tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. Las cifras actuales de la distribución de la renta arrojan un coeficiente Gini de 0,26 en Francia, frente a un 0,29 de media en la Unión Europea y un 0,35 en Gran Bretaña. Asimismo, la proporción entre el quintil de ingreso más elevado y el quintil más bajo es menor en Francia que en muchas otras partes de Europa. El nivel de pobreza tampoco presenta rasgos excepcionales en términos europeos: el 12 por 100 de los hogares franceses posee una renta por debajo del 60 por 100 de la media nacional, al igual que Holanda y de nuevo por debajo de las cifras equivalentes de Alemania, Gran Bretaña o de la Unión Europea en su conjunto. Todos estos datos no pretenden desplegar una defensa del sistema francés como tal, sino que únicamente aspiran a señalar que la argumentación de Smith sobre la existencia de un modelo galo específicamente desigual no se sostiene.

¿Qué decir respecto al sistema de pensiones? La afirmación fundamental de Smith sobre este punto estriba en que el sistema está escorado a favor de los empleados del sector público, que constituyen el 30 por 100 de la población jubilada y que, sin embargo, acaparan el 60 por 100 de las pensiones. Pero, nuevamente, esto no es algo que se desprenda de las cifras, ya que, según el Ministère de Santé et des Solidarités, los jubilados del sector público suman el 19,6 del total y reciben el 25,7 por 100 de las pensiones. Esta discrepancia responde a que en la Administración civil la especialización laboral media es más elevada que en el resto del mercado laboral y, por lo tanto, también los ingresos que se perciben; esto mismo puede aplicarse a los *cadres*, así como al sector agrícola, que revela el mismo fenómeno en sentido inverso y donde el 17,9 por 100 de los jubilados ocupa la categoría de *paysans*, percibiendo únicamente el 11,5 por 100 de las pensiones. Así pues, Smith está en lo cierto cuando afirma que el sistema de pensiones francés no es redistributivo, en tanto que reproduce las desigualdades en la renta existentes en la sociedad, pero los datos que aporta *exageran* el grado en que se produce esa mala distribución. Igualmente, resulta dudosa su afirmación de que una inminente «crisis demográfica» –un incremento de 12 a 22 millones de la población por encima de la edad de sesenta años, entre 2000 y 2040– exige una reforma radical de un sistema público de pensiones «insostenible». Y, lo que es más importante, probablemente los recortes en las pensiones públicas y la generalización de la gestión privada que propugna darían como resultado un mayor ensanchamiento de las diferencias en la medida en que las personas más ricas saldrían del sistema público y las personas que no pudieran permitirse acogerse al sistema privado quedarían a expensas de una menguada provisión de fondos estatales.

France in Crisis recoge muchas críticas y observaciones que resultan importantes y pertinentes. Pero no toca cuestiones políticas cruciales, lo cual es fruto en buena medida de la ausencia de un concepto de clase de la

que adolece su enfoque. En opinión de Smith, el rechazo por parte de los sindicatos franceses a aceptar un equilibrio razonable entre la redistribución del sistema escandinavo y el dinamismo de América del Norte es una cuestión tanto de privilegios como de obstinación. Pero se torna mucho más comprensible si prestamos atención al equilibrio de fuerzas sociales vigente en la Francia actual. Dado el oportunismo táctico y la debilidad electoral de los socialistas, parece poco probable que una fuerza política que asegure el sacrificio por parte de la fuerza de trabajo se vea en alguna medida correspondida por parte de los empresarios.

En efecto, la mayor fuerza para provocar una ruptura con el actual modelo social francés descansa no en el ambivalente paquete de reformas sociales y liberales propuesto por Smith, sino en un auténtico asalto a los baluartes del «privilegio» corporativista, con Sarkozy como su más probable mascarón de proa. Las prescripciones perfiladas en *France in Crisis* no son una defensa frente a tal ofensiva, que sin duda conllevaría las medidas liberalizadoras propugnadas por Smith, a pesar de ser incompatible con algunos de los aspectos sociales de su lista de deseos. Tal vez Smith debería ser más cauteloso con lo que pide. No obstante, a pesar de todos los errores del libro, su trabajo desempeña una tarea de crucial importancia: arroja luz sobre la ausencia de un auténtico contraprograma alternativo al ofrecido por los apologistas del neoliberalismo y lanza a la izquierda el desafío de su diseño como una cuestión urgente.